RESOLUCIÓN 074 DEL 2026

(23 DE ENERO DEL 2026)

"Por medio de la cual se declara la procedencia de la Contratación Directa para celebrar un Contrato Interadministrativo con la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI"

LA DIRECTORA GENERAL DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL - ANSV

En uso de las facultades constitucionales y legales, en especial de las que le confiere las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto Único Reglamentario (DUR) 1082 de 2015, el Decreto 1207 del 18 de julio de 2023 y,

CONSIDERANDO

Que el artículo 2° de la Constitución Política de Colombia de 1991 consagra: *"(...) Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general, y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (...)"*.

Que a su turno el artículo 113 de la Constitución Política, establece que: *"(…) Los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines (…)"*.

Que el artículo 209 ibidem, en el inciso 2° señala que *"(…) Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado (…)"*.

Que la Ley 489 de 1998 en el artículo 3° de señala que la Función Administrativa se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia.

Que, en virtud de los principios de coordinación y colaboración armónica, el artículo 6° de la Ley 489 de 1998 indica: *"(…) las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones, con el fin de lograr sus fines y cometidos estatales. En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar su cumplimiento por los órganos, dependencia, organismos y entidades titulares"*.

Que el literal a), del numeral 1, del artículo 2, de la Ley 80 de 1993, establece: *"1o. Se denominan entidades estatales: i. La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas*

metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles."

Que el parágrafo 1º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007 establece el deber de la entidad pública de *"(…) justificar de manera previa a la apertura del proceso de selección de que se trate, los fundamentos jurídicos que soportan la modalidad de selección que se propone adelantar"*.

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, establece la obligación de las entidades estatales de señalar en un acto administrativo la justificación para adelantar el proceso de contratación bajo la modalidad de contratación directa.

Que la precitada Ley en el Literal c) del numeral 4° del artículo 2°, modificado por el artículo 92 de la Ley 1474 de 2011, establece como modalidad de contratación directa, la celebración de contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos.

Que el artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015 establece: *"(...) La modalidad de selección para la contratación entre entidades estatales es la contratación directa (...)"*.

Que la Agencia Nacional de Seguridad Vial se rige en materia contractual por las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, esto es, Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011 y sus Decretos Reglamentarios.

Que en cumplimiento de lo establecido por el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del Decreto 1082 de 2015, la Agencia Nacional de Seguridad Vial elaboró el correspondiente estudio previo, en el que señala la necesidad a satisfacer, la cual está orientada a contratar la prestación de servicios.

Que, de conformidad con el artículo 2 de la ley 1702 de 2013 *"Por la cual se crea la Agencia Nacional de Seguridad vial y se dictan otras disposiciones"*, dispone que, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) es la máxima autoridad para la aplicación de las políticas y medidas de seguridad vial nacional. Coordina los organismos y entidades públicas y privadas comprometidas con la seguridad vial e implementa el plan de acción de la seguridad vial del Gobierno; su misión es prevenir y reducir los accidentes de tránsito.

Que el artículo 3 de la misma norma señala como objeto de la ANSV la planificación, articulación y gestión de la seguridad vial del país. Será el soporte institucional y de coordinación para la ejecución, el seguimiento y el control de las estrategias, los planes y las acciones dirigidos a dar cumplimiento a los objetivos de las políticas de seguridad vial del Gobierno Nacional en todo el territorio nacional.

Que la **Dirección de Observatorio Nacional de Seguridad Vial** de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, justificó mediante memorando bajo radicado No. 20265000001583 de 19 de enero del 2026, presentó ante la ordenadora del gasto la solicitud de suscripción de un contrato interadministrativo con la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI, con el objeto de "*Desarrollar una investigación especializada para evaluar y diseñar la hoja de ruta de la actualización normativa y tecnológica del Informe Policial de Accidentes de Tránsito – IPAT, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031"*, requerimiento que justificó en el documento denominado Estudios Previos, el cual hace parte integral del presente acto administrativo.

Que la **RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI,** es una organización entidad descentralizada indirecta, con una estructura jurídica y misional que posee personería jurídica de utilidad común y es de naturaleza pública. Está organizada como una Asociación sin ánimo de lucro y de carácter académico que agrupa a Instituciones de Educación Superior estatales (públicas) de todo el territorio nacional. lo que le confiere una naturaleza pública y la clasifica como entidad estatal según lo previsto en el artículo 2°, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993. Esta condición le permite celebrar contratos interadministrativos de manera directa, conforme al literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007. La misma se rige por la Constitución Política de Colombia, el Código Civil, la Ley 489 de 1998, la Ley 80 de 1993 y la Ley 30 de 1992 y goza de autonomía presupuestal, administrativa y financiera.

El objeto principal de REDIPI es contribuir al progreso regional y nacional, así como al fortalecimiento del sistema educativo y proyectos de ciencia, tecnología e innovación en Colombia.

Sus funciones y objetivos se dividen en áreas clave:

1. Desarrollo e Innovación

- Implementar planes y proyectos que fomenten el **conocimiento e innovación** para mejorar la competitividad y productividad del país.
- Actuar en campos de fortalecimiento institucional, científico, productivo, cultural, investigativo y tecnológico.

2. Educación y Academia

- Realizar actividades meritorias de educación en los niveles **técnico profesional, tecnológico y profesional universitario**.

- Defender la **autonomía de la educación superior** y divulgar sus principios fundamentales.
- Evaluar y concertar **políticas públicas** para la planeación y aseguramiento de la calidad educativa.

3. Cooperación y Proyección

- Establecer vínculos con asociaciones educativas internacionales y fomentar la excelencia académica.
- Servir como vocera de los intereses de sus socios ante las ramas del Estado (ejecutiva, legislativa y judicial).
- Prestar servicios de consultoría, asesoría y apoyo logístico tanto al sector público como privado en materias relacionadas con su objeto.

Que de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del Decreto 1082 de 2015, a continuación, se señalan los requisitos que debe contener el presente Acto Administrativo de Justificación de la Contratación Directa, así:

1. **<u>Causal que se invoca directamente:</u>** La contratación se realizará de manera directa de conformidad con el siguiente fundamento legal:

   Sea lo primero indicar que la presente contratación se rige por los principios de la Constitución Política de Colombia y atiende los fines estatales previstos en el artículo 2º de la Constitución Política, en especial con "*Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución (…)".*

   El Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia señala que, la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, delegación y desconcentración de funciones. Así mismo, en el artículo 113 constitucional, se establece que los diferentes órganos del Estado tienen funciones separadas, pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines.

   La Ley 489 de 1998, establece en su artículo 6 que:

   "En virtud del principio de coordinación y colaboración, las autoridades administrativas deben garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones con el fin de lograr los fines y cometidos estatales.

   En consecuencia, prestarán su colaboración a las demás entidades para facilitar el ejercicio de sus funciones y se abstendrán de impedir o estorbar

su cumplimiento por los órganos, dependencias, organismos y entidades titulares"

Para efectos de contratación estatal, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, específicamente en el Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, enlista como entidades estatales:

"a) La Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el Distrito Capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

b) El Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos."

Por su parte el artículo 32 ibidem, indica que serán contratos estatales todos los actos jurídicos generadores de obligaciones que celebren las entidades, previstos en el derecho privado o en disposiciones especiales, o derivados del ejercicio de la autonomía de la voluntad.

Así, se categorizan como contratos interadministrativos aquellos actos jurídicos generadores de obligaciones celebrados entre entidades denominadas estatales al tenor del Artículo 2 de la Ley 80 de 1993.

De otro lado, el Decreto 1082 de 2015 en su artículo 2.2.1.2.1.4.4. dispone la modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del dicho decreto, esto es, la emisión por parte de la Entidad contratante de un acto administrativo que justifique la contratación bajo la modalidad de contratación directa.

Ahora bien, el Manual Unificado de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en el Numeral 4.1.4.1.1. explica los convenios y contratos

interadministrativos en los siguientes términos:

"Los Convenios y Contratos Interadministrativos son aquellos que se suscriben entre entidades públicas, de acuerdo con la normatividad vigente, para lo cual la ANSV debe verificar la naturaleza de la parte conveniente o contratante.

La diferencia entre los convenios y contratos de esta naturaleza radica en que los convenios se suscriben para aunar esfuerzos y no implican contraprestaciones mutuas, por otro lado, las dos partes intervinientes acuden para satisfacer un mismo interés; al contrato, en los contratos se pretende el intercambio de prestaciones de contenido económico y la satisfacción de necesidades opuestas. (…)".

Mediante Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del Consejero Álvaro Namén Vargas, Rad No. 2257 del 2016, se consideró:

"(…) la Sala quiere enfatizar que un contrato interadministrativo es aquel negocio jurídico celebrado entre dos entidades públicas, mediante el cual una de las dos partes se obliga para con la otra a una prestación (suministro de un bien, realización de una obra o prestación de un servicio), por la que, una vez cumplida, obtendrá una remuneración o precio. (…)

a. Los contratos interadministrativos, en todos los casos (contratación directa y aún en los eventos en que se ordene que sean el resultado de una licitación pública o selección abreviada), deben tener relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos, los cuales, naturalmente, están sometidos a la ley (literal c, numeral 4, inciso primero del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007). Esta exigencia significa que la entidad estatal ejecutora (contratista) posee la capacidad jurídica y financiera, el soporte técnico y operativo y la experiencia acreditada para ejecutar ella misma el objeto contractual (…)"

"(…) La entidades públicas, para el cumplimiento de los fines del Estado, la satisfacción de los intereses y necesidades colectivas, la prestación de servicios públicos y la realización de actividades administrativas e incluso industriales y comerciales, requieren el aprovisionamiento de bienes y servicios y la realización de obras, lo cual consiguen con la colaboración de los particulares o de otras entidades que integran la administración pública, mediante la celebración de contratos por los que, regularmente, deben pagar un precio o remuneración."

"(...) De manera que debe entenderse que el contrato interadministrativo,

cuyo objeto bien podría ser ejecutado por los particulares, genera obligaciones recíprocas y patrimoniales a ambas entidades contrayentes, dado que concurren a su formación con intereses disímiles o contrapuestos, pues, aunque la entidad que resulta contratista es de carácter público, tiene intereses propios derivados de su actividad.

De este modo los contratos interadministrativos comportan el pago de una remuneración, dentro del cumplimiento de un fin estatal que para el caso está radicado en la entidad estatal contratante, en tanto que la entidad estatal contratista actúa en su propio interés, bajo el amparo de una relación jurídica de carácter patrimonial que, en definitiva, incide sobre los derechos subjetivos de las partes, a diferencia de los convenios interadministrativos que, como se puntualizará más adelante, son acuerdos que permite la autonomía de la voluntad celebrados entre entidades estatales para el cumplimiento de fines que les son propios (fines estatales) y que no involucran una relación negocial fundada en un carácter patrimonial ni tampoco una contraposición de intereses. (...)"

La Corte Constitucional en sentencia C-671 del 28 de octubre de 2015, con ponencia del Magistrado Alberto Rojas Ríos, al analizar la constitucionalidad del Decreto 1773 de 2015 "Por el cual se autoriza la celebración de convenios administrativos para la ejecución de recursos públicos por parte de algunas entidades territoriales", frente a la figura del convenio interadministrativo, señaló:

"(…) Lo que hace interadministrativo a un convenio o acuerdo específico o convenio no es el procedimiento de selección aplicable, sino la calidad de los sujetos contratantes, esto es que las dos partes de la relación jurídica contractual formen parte de la administración pública (…)".

Según lo dispuesto por la Ley 1150 de 2007, en el artículo 2: *"La escogencia del contratista se efectuará con arreglo a las modalidades de selección de licitación pública, selección abreviada, concurso de méritos y contratación directa",* y fija las reglas para cada modalidad.

Respecto a la Modalidad de Selección de Contratación Directa, de conformidad con lo previsto en el Numeral 4° Artículo 2° de la Ley 1150 de 2007, la misma se encuentra permitida de forma exclusiva para los asuntos allí enlistados, en los que se incluye: *"(...) c) Contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas de los mismos tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la Ley o en sus Reglamentos (...)".*

El Inciso 1 del Literal c) del Numeral 4° del Artículo 2° de la Ley 1150 de

2007 modificado por el Artículo 92 de la Ley 1474 de 2011 fue reglamentado por el Artículo 2.2.1.2.1.4.4. del Decreto 1082 de 2015, que señala:

"Artículo 2.2.1.2.1.4.4. Convenios o contratos interadministrativos. La modalidad de selección para la contratación entre Entidades Estatales es la contratación directa; y, en consecuencia, le es aplicable lo establecido en el artículo 2.2.1.2.1.4.1 del presente decreto. (...)"

El Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sección tercera, Radicado No. 11001032600020090007000, sentencia del 7 de marzo de 2011, Consejero Ponente Enrique Gil Botero, se pronunció frente a los contratos interadministrativos, en los siguientes términos:

"La razón por la que el legislador obró así es bastante clara. Buscó ordenar las modalidades de selección, empezando por su nombre, pero sobre todo para homogeneizar las causales que contenían –cuando este era el caso-, de allí que se denominaran conforme a su finalidad y propósito. Por esto llamó contratación directa a aquella forma de escoger al contratista donde no es necesario que la administración obtenga dos o más ofertas, toda vez que es la única manera de entender que de verdad la contratación es directa. Si necesitara varias propuestas, la modalidad no sería esta, ya que la expresión contratación directa debe dar la idea de que la contratación se realiza con quien la entidad escoja libremente, de no ser así no sería directa. Este fue el problema nominal que tuvo la ley 80, como quiera que recogía bajo este nombre muchas causales donde se exigían varias ofertas –incluso hasta 10, como en la menor cuantía-, por ello nada tenía de directa la elección.

(...) Pero no sólo de aquí se deduce lo que se viene expresando. Del articulado mismo de la ley 1150 se desprende que las causales de contratación directa no requieren de la obtención de un número plural de ofertas. Por el contrario, la escoge libremente, bien pidiendo una sola oferta o incluso ninguna, pudiendo pasarse -en este último caso- a suscribir directamente el contrato."

En igual sentido, el Honorable Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo - Sección Tercera, Consejero ponente: Mauricio Fajardo Gómez, Radicación número: 66001-23-31-000-1998-00261-01(17860), frente a la naturaleza de los contratos interadministrativos ha precisado:

"(...) En atención a lo anterior y en relación específicamente con lo que interesa para el caso concreto, se puede señalar que los convenios o contratos interadministrativos tienen como características principales las siguientes:

(i) constituyen verdaderos contratos en los términos del Código de Comercio cuando su objetivo lo constituyen obligaciones patrimoniales;
(ii) tienen como fuente la autonomía contractual;
(iii) son contratos nominados puesto que están mencionados en la ley;
(iv) son contratos atípicos desde la perspectiva legal dado que se advierte la ausencia de unas normas que de manera detallada los disciplinen, los expliquen y los desarrollen, como sí las tienen los contratos típicos, por ejemplo compra venta, arrendamiento, mandato, etc.
(v) la normatividad a la cual se encuentran sujetos en principio es la del Estatuto General de Contratación, en atención a que las partes que los celebran son entidades estatales y, por consiguiente, también se obligan a las disposiciones que resulten pertinentes del Código Civil y del Código de Comercio;
(vi) dan lugar a la creación de obligaciones jurídicamente exigibles;
(vii) persiguen una finalidad común a través de la realización de intereses compartidos entre las entidades vinculadas;
(viii) la acción mediante la cual se deben ventilar las diferencias que sobre el particular surjan es la de controversias contractuales. (…)"

A su vez el Manual Unificado de Contratación de la ANSV, respecto del régimen público aplicable cuando esta entidad estatal obra como contratante, como en este asunto, contempla la modalidad de contratación directa y las causales en las que opera:

"(…) Esta modalidad permite seleccionar el contratista sin adelantar convocatoria pública y sin la necesidad de recibir varias cotizaciones. Constituye un mecanismo excepcional y de interpretación restrictiva, por lo que su procedencia se dará sólo si se configura alguna de las causales definidas en el numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, o la norma que la modifique, adiciona, complemente o sustituya y son las siguientes:

a. Urgencia Manifiesta.
b. Contratación de Empréstitos.
c. ***Convenios y Contratos Interadministrativos.***
d. Contratos para el desarrollo de actividades científicas y tecnológicas.
e. Cuando no exista pluralidad de oferentes en el mercado.
f. Prestación de servicios profesionales (con personas naturales o jurídicas), de apoyo a la gestión o ejecución de trabajos artísticos encomendados a personas naturales.
g. Arrendamiento y adquisición de bienes.

Con miras a adelantar este procedimiento, se requiere la elaboración de estudios previos y un acto administrativo (a excepción de prestación de

servicios profesionales y apoyo a la gestión; y empréstitos) donde se justifique la contratación por esta modalidad, dicho acto debe contener tal acto las razones de hecho y derecho que fundamentan la decisión. Finalmente, no se requiere elaborar pliegos de condiciones.

En los casos de la Urgencia Manifiesta, el acto de declaratoria de la misma hará las veces de acto administrativo de justificación.

Para llevar este proceso se deberá seguir lo establecido en el Procedimiento correspondiente en el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad."

Teniendo en cuenta los antecedentes normativos y jurisprudenciales expuestos, se tiene entonces que la modalidad de selección para la presente contratación será la contenida en el Numeral 4.3.2.3. literal l. del Manual Unificado de Contratación de la ANSV que atiende *"Convenios y contratos interadministrativos, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora señalado en la ley o en sus reglamentos",* en la que dada la naturaleza pública de dichos actos jurídicos y de las partes que lo celebran, se otorga la facultad a la ANSV de efectuar erogaciones con cargo a los recursos de inversión del Fondo Nacional de Seguridad Vial, aplicándose las normas que corresponden al régimen público de contratación.

Por otra parte, mediante concepto emitido el 15 de enero del 2026, por Legal Service S.A.S, Asesor Externo de la ANSV, (el cual se adjunta como parte integral de este acto), se concluyó: "(…)

"En consecuencia, conforme al tenor literal del parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 y a la interpretación fijada por el Consejo de Estado y acatada por Colombia Compra Eficiente, la prohibición allí prevista se circunscribe a los convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos y no resulta aplicable a los contratos interadministrativos. Finalmente se indica que este concepto se ha centrado en la prohibición del parágrafo 1 del artículo 38 de la Ley 996 de 2005, por lo que no debe perderse de vista que esta interpretación no es extensiva para la prohibición contenida en el artículo 335 de la citada ley, que se activa este 31 de enero de 2026."

Bajo ese supuesto, se cumplen los requisitos mínimos a saber:

a. La ANSV y la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI son entidades públicas según lo indicado en el Artículo 2 de la Ley 80 de 1993.
b. La misionalidad y el objeto social de RED DE INSTITUCIONES PARA

LA INNOVACIÓN – REDIPI, permite satisfacer la necesidad identificada y justificada en el estudio previo y en el presente acto administrativo.

c. El objeto del presente proceso se encuentra alineado a la misión y visión de la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI y de la ANSV.

2. **El objeto a contratar:** *Desarrollar una investigación especializada para evaluar y diseñar la hoja de ruta de la actualización normativa y tecnológica del Informe Policial de Accidentes de Tránsito – IPAT, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031".*

3. **El presupuesto para la contratación y las condiciones que exigirá al contratista:** El presupuesto asignado a la contratación, asciende a la suma de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.892.400.000),** incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.

El valor del contrato se encuentra amparado con CVI No. 108 de 19/01/2026 y CDR No. 006 del 19/01/2026.

Las condiciones que se exigirán al contratista se detallan en el estudio previo, documentos anexos y la propuesta presentada por el contratista, los cuales hacen parte integral del presente acto.

4. **El lugar en el cual los interesados pueden consultar los estudios y documentos previos:** Los estudios y documentos previos, de esta Contratación Directa, estarán para la consulta en la página web de la Agencia Nacional de Contratación Pública https://www.colombiacompra.gov.co/ y en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos de Colombia https://www.datos.gov.co/.

5. **Idoneidad de la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI:**

De conformidad con sus Estatutos, REDIPI es una entidad descentralizada indirecta, de naturaleza pública y sin ánimo de lucro, constituida como una red de carácter académico que agrupa a diversas instituciones de educación superior del país. Su personería jurídica y régimen se sustentan en el artículo 2 numeral 1 literal a) de la Ley 80 de 1993 y el artículo 81 de la Ley 30 de 1992. Al estar compuesta por instituciones públicas, se clasifica como entidad estatal, lo cual la faculta plenamente para suscribir contratos interadministrativos de conformidad con el artículo 92 de la Ley 1150 de 2007.

La RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI permite satisfacer la necesidad identificada y justificada en el estudio previo de la contratación, pues

dentro de su misionalidad establece: De acuerdo con sus estatutos, REDIPI tiene como finalidad contribuir al fortalecimiento del sistema científico y tecnológico del país mediante la ejecución de planes y proyectos basados en la investigación e innovación con impacto social.

De esta manera, la vinculación de la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI resulta coherente con los fines misionales de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y se ajusta a lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política y el artículo 2.2.15.1.4 del Decreto 1082 de 2015, en cuanto se trata de un contrato interadministrativo celebrado con una institución pública de educación superior para el desarrollo de actividades de ciencia, tecnología e innovación que fortalecen las políticas públicas en materia de seguridad vial.

Por lo tanto, dado que se trata de la celebración de un Contrato Interadministrativo, la selección del contratista se determina a partir de su naturaleza jurídica y objeto social, relacionado con el objeto del contrato interadministrativo que se pretende suscribir. En este orden de ideas y en virtud de los mencionados artículos 209 de la Constitución Política de Colombia, Ley 489 de 1998 y la Ley 1702 de 2013, la Agencia Nacional de Seguridad Vial - ANSV, han identificado la necesidad de establecer un vínculo con la RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI a fin de garantizar la colaboración armónica y subsidiaria para poder conseguir los fines del Estado en las materias de su competencia y contribuye a fortalecer los principios de la función administrativa.

En consonancia con los fundamentos anteriormente expuestos y en procura de la satisfacción de las necesidades planteadas oportuna y eficazmente, es procedente suscribir un contrato interadministrativo entre la Agencia Nacional de Seguridad Vial y RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI, en virtud del principio de coordinación y colaboración para garantizar la armonía en el ejercicio de sus respectivas funciones administrativas y la consecución de los cometidos estatales.

Lo anterior, toda vez que, RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI es una entidad de carácter académico que desde sus inicios han alcanzado reconocimiento en la región por la calidad de sus servicios educativos y por contribuir con la formación del talento humano requerido para el desarrollo tecnológico del país.

Aunado a lo anterior, REDIPI posee una estructura técnica y de gestión de proyectos consolidada, con personal especializado en ciencias aplicadas, ingeniería, estadística, innovación tecnológica y análisis de datos. Según sus estatutos, la Red puede integrar los recursos científicos, logísticos y tecnológicos de sus entidades asociadas, conformando equipos interdisciplinarios y unidades de apoyo para cada proyecto, de conformidad con los documentos de constitución, estatutos, registro y experiencia.

Es importante, además anotar que, la incorporación de recursos a la Red de Instituciones para la Innovación – REDIPI se fundamenta en su naturaleza de entidad descentralizada indirecta, la cual, de conformidad con su personería jurídica de utilidad común y naturaleza pública, goza de autonomía administrativa

y financiera para la gestión de su patrimonio.

Al tratarse de una entidad sin ánimo de lucro, la incorporación de estos recursos no tiene como fin la generación de utilidades distribuibles, sino que constituye el soporte financiero indispensable para el cumplimiento de su objeto misional.

La formulación y ejecución de planes, programas y proyectos de investigación e innovación exigen la disposición de recursos que permitan la contratación de personal especializado, la adquisición de infraestructura tecnológica y el soporte logístico necesario para impactar el desarrollo productivo y social del país.

Dado su carácter público y su enfoque en el fortalecimiento del sistema educativo y tecnológico, la gestión de estos recursos se alinea con las metas del Estado en materia de ciencia y tecnología, asegurando que cada peso incorporado se reinvierta directamente en proyectos de alto impacto social y cultural.

De acuerdo con sus estatutos, el patrimonio de REDIPI se incrementa mediante aportes, convenios y contratos. Por tanto, la incorporación de recursos objeto de este proceso es el mecanismo legal idóneo para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por la Red en beneficio de la comunidad académica y científica.

Los estatutos y antecedentes contractuales evidencian que REDIPI tiene competencia jurídica para desarrollar actividades de socialización e implementación, vinculadas a la gestión pública y desarrollo territorial. Además de tener experiencia comprobada en la suscripción de convenios interadministrativos y de cooperación con múltiples entidades estatales, ejecutando contratos con componentes técnicos, administrativos y financieros complejos.

En ese sentido, la Red dispone de los requisitos requeridos para cumplir con los requerimientos metodológicos definidos por la ANSV, entre ellos: diseño y ejecución de investigaciones con representatividad nacional (encuestas, entrevistas y grupos focales en ocho regiones); análisis de aplicación normativa y técnico y comparación con estándares internacionales; procesamiento estadístico de datos de siniestralidad vial provenientes de fuentes oficiales (ONSV, INMLCF, RUNT, Fasecolda, etc.); disponer de personal especializado en ingeniería, estadística, análisis de datos, innovación tecnológica y ciencias aplicadas; infraestructura académica y de investigación (laboratorios, centros de datos, equipos y redes de apoyo científico); capacidad administrativa y financiera para ejecutar proyectos con recursos públicos, acreditada por su clasificación en el RUP como mediana empresa, todo ello soportado en las Instituciones que la integran además de su propia capacidad y experiencia para elaboración de documentos técnicos con rigor científico, cuya orientación debe estar encaminada a la formulación de recomendaciones regulatorias y de política pública.

Para ello, se encuentra el siguiente cuadro que da cuenta de la experiencia:

No. DEL CONTRATO	ENTIDAD	OBJETO CONTRACTUAL	VALOR DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACIÓN

00000879	Departamento de Santander	APOYAR EL DESARROLLO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO DENOMINADO INNOVACION POR UNA CULUTRA CIUDADANA PARTICIPATIVA MEDIANTE LA INVESTIGACION DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL APOYADO EN TIC EN EL AREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA Y BARRANCABERMEJA.	$2.369.423.764	5/16/2020
IN-I02-11-22	Unidades Tecnológicas de Santander	AUNAR ESFUERZOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACION Y EXTENSION PARA LA COMUNIDAD ACADEMICA POR MEDIO DE LA ORGANIZACIÓN Y APOYO PARA LA CONSOLIDACION DE LOS DIFERENTES PROYECTOS ACADEMICOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER	$210.000.000	12/30/2022
IN-I03-09-23	Unidades Tecnológicas de Santander	ASISTENCIA TECNICA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DINAMICAS DE LOS PROCESOS DE UTSMART, A FIN DE GENERAR INTERACCIONES ACADEMICAS, SOCIALES, CULTURALES, TECNOLOGICAS, DE INVESTIGACION, DE EMPRENDIMIENTO Y DE RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO; QUE POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CURRICULOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADEMICOS Y LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN CREACION, INNOVACION Y DESARROLLO.	$600.000.000	2/29/2024
CO1.PCCNTR.5942688	Departamento de Santander	AUNAR ESFUERZO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LA RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN REDIPI PARA APOYAR EL PROCESO DE	$1.159.000.000	6/19/2024

		FORMULACIÓN ELABORACIÓN CONCERTACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL DOCUMENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 ENMARCADO EN EL PROYECTO FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER		
025-2024	Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA EL ACOMPAÑAMIENTO AL PROCESO DE FORTALECIMIENTO Y GENERACIÓN DE ESPACIOS ÓPTIMOS QUE APORTEN PARA EL APRENDIZAJE Y EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN EL MARCO DEL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Y EL APORTE CIENTÍFICO DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ	$ 519.120.000	11/30/2024
IN-I001-24	Unidades Tecnológicas de Santander	FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN LOS DIFERENTES ACTORES DEL ECOSISTEMA UTS CON EL PROPÓSITO DE CREAR Y PONER AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, Y GENERAR INTERACCIONES ACADÉMICAS, SOCIALES, CULTURALES, DE INVESTIGACIÓN, DE EMPRENDIMIENTO Y DE RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO	$2.000.000.000	12/11/2024
CO1.PCCNTR.7422282 (007-2025)	Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN CIENTÍFICA QUE PERMITA	$ 212.008.184	6/19/2025

		LA VALORACIÓN DE BIOMASA VEGETAL COMO FUENTE NO CONVENCIONAL DE ENERGÍA RENOVABLE EN LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO EN EL MARCO DE LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ		
ANSV-022-2025	Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV	FOMENTAR LA CREACIÓN DE UNA RED NACIONAL DE LÍDERES Y LIDERESAS POR LA SEGURIDAD VIAL, POR MEDIO DE UN PROGRAMA DE FORMACIÓN QUE AYUDE E INCENTIVE A LÍDERES, LIDERESAS E INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR A PROMOVER LA SEGURIDAD VIAL CON ENFOQUE DE GÉNERO EN SUS TERRITORIOS	$3.010.000.000	En ejecución
IN-I002-25	Unidades Tecnológicas de Santander	ASISTENCIA TÉCNICA, ASESORÍA Y ACOMPAÑAMIENTO EN LAS DINÁMICAS DE LOS PROCESOS DE UTSMART A DESARROLLAR EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA; A FIN DE GENERAR INTERACCIONES ACADÉMICAS, SOCIALES, CULTURALES, TECNOLÓGICAS, DE INVESTIGACIÓN, DE EMPRENDIMIENTO Y RELACIONAMIENTO CON EL SECTOR EXTERNO; QUE POSIBILITEN EL FORTALECIMIENTO DE LOS CURRÍCULOS EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS ACADÉMICOS Y LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES EN CREACIÓN, INNOVACIÓN Y DESARROLLO	$2.500.000.000	28/07/2025
CO1.PCCNTR.7424437 (008-2025)	Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO PARA AUNAR ESFUERZOS, APOYAR LOS PROCESOS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y SUS SERVICIOS	$ 595.142.688	8/11/2025

		ECOSISTÉMICOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD Y DEL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN DEL MAGDALENA MEDIO, EN EL MARCO DEL COMPONENTE DE INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ		

Ahora teniendo presente los estatutos, registro en el RUP y trayectoria institucional, la Red de Instituciones para la Innovación – REDIPI acredita las condiciones jurídicas, técnicas, financieras y misionales requeridas para desarrollar una investigación especializada para evaluar y diseñar la hoja de ruta de la actualización normativa y tecnológica del Informe Policial de Accidentes de Tránsito – IPAT, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031.

Su naturaleza de entidad pública descentralizada indirecta, su objeto social orientado a la ciencia, tecnología e innovación, su experiencia en investigación aplicada y análisis de datos, y su capacidad organizacional respaldada por instituciones de educación superior estatales, la hacen idónea, competente y pertinente para desarrollar la investigación bajo estándares de calidad, transparencia y rigor científico.

En consecuencia, REDIPI cumple a cabalidad con las condiciones exigidas para contratar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial – ANSV, y constituye un aliado estratégico institucional para el fortalecimiento del conocimiento técnico y la actualización normativa y tecnológica del IPAT, para el fortalecimiento de la información en seguridad vial del país.

Que, adicional a lo anterior, el Director de Observatorio Nacional de Seguridad Vial, certificó la idoneidad del contratista para ejecutar el objeto previsto. El certificado de idoneidad correspondiente hace parte integral del presente acto administrativo.

Que los estudios previos elaborados por la Dirección de Observatorio Nacional de Seguridad Vial incluyen las condiciones que se exigirán al futuro contratista, así como los demás documentos precontractuales que soportan el proceso de contratación al que hace referencia la presente Resolución, podrán consultarse en el enlace del proceso en el aplicativo SECOP II o en el Grupo de Contratación ubicado en las instalaciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial en la ciudad de Bogotá D.C.

Que la solicitud de contratación presentada por la Dirección de Observatorio Nacional de Seguridad Vial, fue estudiada y aprobada por el Comité de Contratación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, en la **Sesión Extraordinaria No. 02 llevada a cabo el 21 de enero del 2026.**

Que, la presente solicitud de contratación se encuentra incluida en el Plan Anual de Adquisiciones de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, **Versión 04 de la Vigencia 2026.**

Que, en mérito de lo expuesto, la Directora General en su calidad de Ordenadora del gasto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO. Declarar procedente y justificada la modalidad de selección por contratación directa para la celebración de un contrato interadministrativo a suscribirse con la **RED DE INSTITUCIONES PARA LA INNOVACIÓN – REDIPI,** identificada con NIT. **901652336-5**, el cual tendrá por objeto: *"Desarrollar una investigación especializada para evaluar y diseñar la hoja de ruta de la actualización normativa y tecnológica del Informe Policial de Accidentes de Tránsito – IPAT, en el marco del Plan Nacional de Seguridad Vial 2022–2031",* de conformidad con la parte considerativa de la presente Resolución y conforme con lo establecido en el literal c) del numeral 4° del artículo 2° de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 2.2.1.2.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015.

ARTÍCULO SEGUNDO. Establecer como valor para la presente contratación, la suma de **MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.892.400.000), incluido IVA y demás impuestos a que haya lugar.**

El valor del contrato se encuentra amparado con CVI No. 108 de 19/01/2026 y CDR No. 006 del 19/01/2026.

ARTÍCULO TERCERO. El plazo del contrato será por el término de **ONCE (11) MESES,** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. Informar que los estudios previos y demás documentos correspondientes al proceso de contratación al cual hace referencia el presente acto administrativo podrán consultarse en el sistema electrónico de contratación pública (SECOP II) los cuales incluyen las condiciones que se exigirán al contratista.

ARTÍCULO QUINTO. El presente Acto Administrativo rige a partir de la fecha de su expedición y contra el mismo no proceden recursos a través de la vía gubernativa, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO SEXTO. Publicar el presente acto administrativo en el sistema

electrónico de contratación pública (SECOP), acorde con lo estipulado en el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.

Dada en Bogotá, D.C. a los veintitrés (23) días del mes de enero de dos mil veintiséis (2026).

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

MARIANTONIA TABARES PULGARIN
Firmado digitalmente por MARIANTONIA TABARES PULGARIN

MARIANTONIA TABARES PULGARÍN
Directora General
Agencia Nacional de Seguridad Vial

Proyectó:	Mónica Pacheco Caldera – Abogada Contratista de la ANSV
Revisó:	Néstor Fernando Martínez Gaitán – Abogado Contratista de la ANSV
Revisó:	Sofia Santana Salazar – Abogada Contratista de la ANSV
Revisó y aprobó:	Magali del Socorro Rosero Ortiz - Asesora Código 1020 - Grado 16 de la Dirección General, con funciones de Coordinación del Grupo de Gestión Contractual

MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ
Firmado digitalmente por MAGALI DEL SOCORRO ROSERO ORTIZ